INFORME SECRETARIAL.

Bogotá D.C. 6 de mayo de 2020.

En la fecha, pasa al despacho del Juez, Acción de tutela radicada con el número **2020 00149**. Sírvase proveer.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C.

ACCIÓN DE TUTELA NO. 110013105033 2020 00149 00			
ACCIONANTE	Mireya Osorio Parra	**DOC. IDENT.**	40782732
ACCIONADA	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – Caja Honor		
DERECHOS	**MÍNIMO VITAL Y DIGNIDAD HUMANA**		
PRETENSIÓN	ORDENAR a la accionada CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA – CAJA HONOR autorice el retiro definitivo de mis cesantías con el fin de que no sean conculcado el derecho fundamental al mínimo vital de mi unidad familiar y la dignidad personal.		

Bogotá D. C., seis (6) de mayo de dos mil veinte (2020).

A N T E C E D E N T E S

MIREYA OSORIO PARRA, actuando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA - CAJA HONOR, invocando la protección de sus derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL y la DIGNIDAD HUMANA, los cuales considera vulnerados por cuanto la **accionada no ha autorizado el retiro definitivo de sus cesantías pese a la difícil situación económica que atraviesa actualmente con su familia con ocasión a las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional a consecuencia del COVID 19.**

Para fundamentar su solicitud, la accionante relata los siguientes:

I. HECHOS.

1. Que la accionante es servidora pública civil en el cargo de auxiliar de servicios grado 09 y labora en el Distrito 6 de la Plata, Huila.

2. Que ingresó a la institución hace más de 23 años cumpliendo funciones de servicio general.

3. Que tiene como Fondo de Cesantías a la entidad pública Caja Honor de las Fuerzas Militares y la Policía.

Yg

4. Que a la fecha tiene en su cuenta individual de cesantías Caja Honor el valor $2’850.000 aproximadamente, pues ya hice uso de su derecho a la vivienda familiar y ha realizado dos mejoras locativas en su hogar, es decir, que el ahorro con el que cuenta es de cerca de dos años.

5. Que su núcleo familiar está compuesto por su esposo, Abelardo Sanabria Caldón, quien laboraba como moto taxista, su hija María del Carmen Ovalle Osorio, su yerno Jhon Anderson Campos, su hija Karla Marcela Osorio Parra, su hijo Gustavo Adolfo Osorio Parra, su nuera Lina Esmeralda Nieto, quienes laboran en la venta ambulante de comidas rápidas y unos con el alquiler de videojuegos, su nieta Alisson Osorio Nieto, tiene solo 2 años, su nieto Emanuel Patiño Osorio quien tiene 3 años, y su suegra María Elida Caldón, quien tiene 77 años, todos los que en este momento sobreviven económicamente del trabajo informal.

6. Que es la única persona en su núcleo familiar que cuenta con un trabajo estable y un ingreso económico fijo.

7. Que radicó derecho de petición a Caja Honor solicitando el retiro de sus cesantías, tal y como lo demuestra el anexo aportado.

8. Que cuenta con dos créditos con el Banco Pichincha y la Cooperativa Multiservicios que le hacen deducciones directas a mi nómina.

9. Que su asignación básica, con las deducciones, resulta por un monto aproximado de $945.000, del cual debe disponer para el pago de los servicios públicos del hogar, la canasta familiar y solventar los problemas de salud suyos y de sus familiares, por tanto, es muy reducido su poder adquisitivo.

10. Que como es de conocimiento, por las medidas sanitarias para evitar la dispersión y conflagración del COVID-19 Coronavirus, se ordenado el confinamiento a los hogares, circunstancia que afectó la principal fuente de sustento de su familia quienes dependían única y exclusivamente del trabajo informal para su subsistencia.

11. Que actualmente su situación económica es bastante vulnerable, los precios de los alimentos han incrementado bastante y el único ingreso es el que ella aporta, siendo insuficiente.

12. Que lo único que ve posible para ayudar a solventar este problema es solicitar el retiro de sus cesantías.

13. Que en tal sentido radicó al buzón electrónico de la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA derecho de petición.

14. Que recibió respuesta el 14 de abril de 2020 al correo electrónico en la cual manifestaron que la única posibilidad para retirar sus cesantías eran las situaciones contempladas de vivienda y mejoras locativas.

15. Que tal situación desconoce la precaria situación que vive junto a su familia.

II. INTERVENCION DE LA ACCIONADA.

Admitida la tutela el 22 de abril de 2020, de ella se dio traslado a la entidad accionada a fin de que ejerciera el derecho de defensa, solicitándole informara sobre las pretensiones de la accionante, frente a lo cual allegó escrito de

contestación a una de las direcciones electrónicas del despacho, el 28 de abril de 2020 en los siguientes términos.

Respuesta CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

Manifiesta la accionada que de conformidad con la Ley 973 de 2005, el objeto de la Caja es:

> *OBJETO: "Artículo 1o. Definición y objeto. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, tendrá como objeto facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y administración del ahorro de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto.*
>
> *PARÁGRAFO. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá administrar las cesantías del personal de la Fuerza Pública, que haya obtenido vivienda de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional. Para quienes gozan del efecto retroactivo en esta prestación, esta se sujetará al plan de pagos establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público". NATURALEZA:*
>
> *"ARTÍCULO 2o. NATURALEZA. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Bancaria."*
>
> *"ARTICULO 1°-. AFILIADOS. Son afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar de Policía el personal dispuesto por el artículo 14° del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 9° de la Ley 973 de 2005, a su vez modificado por el artículo 1° de la Ley 1305 de 2009.*

Manifestó igualmente, que, frente al hecho décimo quinto, efectivamente Caja Honor emitió respuesta el día 10 de abril de 2020 bajo radicado interno No. 03-01-20200410013377 comunicándole a la accionante lo siguiente:

> Es necesario informar que el Decreto 488 de 2020 regula el retiro de cesantías en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020, en ese sentido, dicha normatividad establece en su artículo 3°, que:
>
> > Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, **el trabajador que haya presentado una disminución de su ingreso mensual, certificada por su empleador**, podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante. Esta disposición aplica **únicamente para retiros de los fondos administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de carácter privado** (Negrilla y subrayado fuera de texto).
>
> En ese sentido, acorde con el artículo 2° de la Ley 973 de 2005, Caja Honor es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, por lo que al ser una Entidad de carácter público no se aplican las disposiciones reguladas en dicho Decreto. De igual manera, según lo que nos comunica que la presente petición usted no se encuentra dentro de las circunstancias contempladas en el Decreto.
>
> Por lo anterior, si quiere realizar retiros parciales de sus cesantías, debe dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 85 numeral 2 del Acuerdo 05 de 2017, el cual dicta:
>
> > RETIRO DE CESANTÍAS PARCIALES. Es el trámite iniciado por el afiliado para el manejo y administración de cesantía, justificando como soporte la destinación específica para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma, liberación de gravámenes del inmueble contraídos por el afiliado, o su cónyuge, compañero (a) permanente, cánones extraordinarios o ejercicio de la opción de adquisición en un contrato de leasing habitacional suscrito por el afiliado o su cónyuge, compañero (a) permanente, este último, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010. Igualmente para educación superior del afiliado, su cónyuge o compañero (a) permanente o sus hijos.

Así las cosas, considera que acceder a lo solicitado crearía una nueva modalidad para el retiro de cesantías que no ha sido establecida por el legislador y afectaría el derecho a la igualdad de todos los afiliados que si están realizando el retiro de

sus cesantías cumpliendo con la Ley y las normas internas que regulan la Entidad.

Por consiguiente, considera que está plenamente demostrado que Caja Honor no está vulnerando derecho alguno a la accionante, por lo tanto, solicita al Despacho RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la presente Acción de Tutela.

III. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde al Despacho determinar si existe violación a los derechos fundamentales al **MÍNIMO VITAL y DIGNIDAD HUMANA,** tal como lo plantea la accionante.

Así mismo, es del caso establecer si es la Acción de Tutela el mecanismo idóneo para resolver la solicitud de MIREYA OSORIO PARRA.

Con lo anterior se procede a resolver previas las siguientes;

C O N S I D E R A C I O N E S

Conforme al art. 86 de la Constitución Política y el Decreto reglamentario de la acción de tutela (art. 1º. del mencionado Decreto), ésta procede contra la acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares, sobre estos últimos, según lo establece la ley (art. 42 del mismo Decreto) que vulneren o amenacen cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales y que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Establece por previsión supra legal la concepción de la acción de tutela, un instrumento jurídico que permite brindar a cualquier persona, sin mayores requisitos de orden formal, la protección específica e inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando se ven vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que le señale la ley, siempre que para la protección del derecho que busca el amparo de tutela no exista otro mecanismo de defensa judicial para protegerlo, o existiendo, al ejercitarse la acción se pretenda evitar un perjuicio irremediable, para lo cual su procedencia sería posible como mecanismo transitorio dada su inmediatez para la protección del derecho constitucional violado.

Además, el Decreto 306 de 1.992, por medio del cual se reglamenta el 2591 referido, establece en su artículo 2º que la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales y que no puede ser utilizada para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquier otra norma de categoría inferior, como así lo tiene interpretado y definido la jurisprudencia reiterada de nuestro máximo Tribunal (Corte Constitucional) de la jurisdicción de tutela.

El juez de tutela está instituido para la guarda de los derechos fundamentales, por esa razón se ha reiterado que incluso no es necesario que en forma particular se indique la vulneración de algún precepto, considerando que si al efectuar el análisis de la controversia que le es planteada, encuentra quebrantado alguno de los principios de orden constitucional, deberá adoptar las medidas tendientes a garantizar la guarda del derecho que encuentre conculcado, si la situación fáctica como las pruebas que sustentan la acción dan cuenta de ello, o incluso si la acción de tutela está dirigida a obtener el amparo de otro derecho que no es el que se afirma vulnerado.

Yg

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Menciona la jurisprudencia de la Corte Constitucional que al analizar el requisito de inmediatez de la acción de tutela por la inminencia de un perjuicio irremediable tal componente debe ponderarse bajo el criterio del plazo razonable y oportuno, tal como lo expresa entre otras en la sentencia T 245 de 2015 en los siguientes términos:

> *"La inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. La satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto. Esa razonabilidad se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental. (…)*
>
> *La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que:*
>
> *i) Exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros;*
>
> *ii) La inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;*
>
> *iii) Exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o*
>
> *iv) Cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos continúa y es actual."*

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Como bien es sabido, la acción de tutela fue creada como un mecanismo cuya finalidad es garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas que están siendo vulnerados o amenazados. Dicha acción tiene un carácter residual, en tanto que la misma procede únicamente ante la inexistencia o ineficacia de otros mecanismos judiciales que contrarresten la inminente vulneración de los derechos fundamentales de las personas. (Sentencia T-132 de 2006).

Bajo este postulado, el inciso 4ª del Art. 86 de la C.P. establece que ***"esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". (Subrayado fuera de texto).***

A su vez, Art. 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que dicha acción será improcedente cuando existan otros medios de defensa judiciales como arriba se mencionó, no obstante, esta acción será procedente excepcionalmente, siempre y cuando dichos medios no resulten eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. Para tal efecto, el Juez constitucional deberá analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar la eficacia de los

medios de defensa judicial existentes y las circunstancias específicas en que se encuentra el accionante para invocar la protección de sus derechos a través de la tutela.

En tal sentido, la acción de tutela procede como mecanismo principal y definitivo de protección de los derechos fundamentales cuando el accionante ha acreditado que no cuenta con otros medios de defensa judicial, o que, existiendo, estos no resultan idóneos para resguardar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados *(Sentencia T-079 de 2016).* De presentarse dicho evento, el Juez Constitucional deberá evaluar las circunstancias específicas en las que se encuentra el accionante, para determinar si en el caso en concreto los medios existentes resultan ineficaces para la protección de sus derechos.

Por su parte, esta acción constitucional procede como mecanismo transitorio en aquellos casos en los que, pese a existir otros medios de defensa alternativos, el accionante busca evitar la consumación de un perjuicio irremediable, caso en el cual la orden de tutela tendrá efectos temporales y producirá efectos hasta tanto la autoridad competente decida de fondo el respectivo caso.

De tal manera, se tiene entonces que existen dos excepciones al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela *(Sentencia T-029 de 2017)*, una de las cuales se encuentra estrechamente ligada con la existencia de un perjuicio irremediable. Así pues, en cuanto a la naturaleza de este perjuicio y cómo identificar la existencia del mismo en un determinado caso, la Corte Constitucional ha establecido las características propias de esta figura de la siguiente manera:

> *"(i) inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir, (ii) grave, por dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado relevante, (iii) que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad". (Sentencia T- 538 de 2013.)*

Para tales efectos, la Corte dispone que el Juez Constitucional debe realizar un juicio de procedibilidad de la acción, el cual deberá ser menos estricto cuando el accionante sea un sujeto de especial protección. De tal manera lo ha dispuesto al establecer que "existen situaciones especiales en las que el análisis de procedencia de la acción debe desatarse de manera más amplia y permisiva, en atención a la especial naturaleza de las personas que solicitan la protección de sus derechos constitucionales fundamentales" *(Sentencia T-515 de 2006)* (Subrayado Fuera de Texto).

Así pues, al momento de realizarse el juicio de procedibilidad, se deberán analizar las condiciones específicas del accionante como sujeto de especial protección, con miras a flexibilizar las reglas generales de procedibilidad de la acción de tutela contempladas en el Decreto 2591 de 1991. *(Sentencia T-206 de 2013)*

> *"Esta Corte ha manifestado que* ***si bien los jueces de tutela deben ser estrictos en la aplicación de estos requisitos, para efectos de hacer valer el carácter subsidiario de la acción de tutela, existen situaciones en las que el análisis de procedibilidad de la tutela se debe efectuar en forma más amplia -esto es, menos estricta-, dada la naturaleza de las personas que solicitan amparo para sus derechos fundamentales: se trata de los casos en que estén de por medio los derechos de cualquiera de los sujetos de especial protección constitucional, tales como niños, mujeres cabeza de familia, ancianos, miembros de minorías o personas en condiciones de extrema pobreza****. En tales situaciones, los jueces deben estudiar las características del perjuicio irremediable arriba explicadas con un criterio de admisibilidad más*

amplio, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad." (Sentencia T-015 de 2006) (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Para realizar dicho análisis, el Juez de Tutela deberá tener en cuenta que este mecanismo se encuentra revestido de un carácter residual y subsidiario, para garantizar una protección inmediata de los derechos fundamentales cuando no exista otro medio de defensa eficaz para salvaguardar el derecho, o cuando esta se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. *(Sentencia T-336 de 2009)*

De tal forma se tiene la acción de tutela procede de manera excepcional en los siguientes casos *(Sentencia T-336 de 2009)*:

"i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no sean lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados o amenazados.

ii) Cuando a pesar de que tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas) y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela"10. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

Frente a este derecho, la Corte Constitucional, en sentencias como la T 581 de 11, estableció:

"MINIMO VITAL DE SUBSISTENCIA. *El concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser evaluado desde un punto de vista desde* ***la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo****, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto,* ***haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo****, verificándose que quien alega su vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana."*

De igual manera, en sentencia T 199 de 2016 amplió el alcance de este derecho en los siguientes términos:

"MINIMO VITAL *- Concepto*

(i) Se trata de acceso básico de condiciones dignas de existencia para el desarrollo del individuo,

(ii) Que depende de su situación particular y

(iii) Es un concepto indeterminado cuya concreción depende de las circunstancias particulares de cada caso, por lo que requiere un análisis caso por caso y cualitativo.

DERECHO FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL*-Reiteración de jurisprudencia*

El mínimo vital es concebido en la jurisprudencia constitucional como "un derecho fundamental que tiene como característica ser cualitativo, por lo que supone que cada quien viva de acuerdo al estatus adquirido durante su vida. Sin embargo, esto no significa que cualquier variación en los ingresos implique necesariamente una vulneración de este derecho. Por el contrario, existe una carga soportable para cada persona, que es mayor entre mejor haya sido la situación económica de cada quien. Por esto, entre mayor sea el estatus socioeconómico, es más difícil que variaciones económicas afecten el mínimo vital y, por ende, la vida digna".

Decreto 488 de 2020

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país a causa de la pandemia COVID 19, el gobierno nacional, en aras de aminorar los efectos económicos producidos por el aislamiento ordenado para mitigar los efectos del virus en la población nacional, emitió el Decreto 488 de 2020, el cual enuncia en su parte considerativa, entre otros aspectos:

"(…) Que el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe a los empleadores efectuar pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados y si los efectuaren perderán las sumas pagadas, sin que puedan repetir lo pagado, norma que es insuficiente para poder brindar un alivio a los trabajadores durante la emergencia declarada por el Gobierno nacional, con el fin de permitirles disponer de una porción de su ahorro de cesantías para poder aminorar los efectos económicos negativos que la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 tendrá en su vida personal y familiar.

Que, de acuerdo con lo anterior, resulta necesario adoptar medidas inmediatas para modificar temporalmente las normas de destinación de cesantías con el fin de brindar un alivio a los trabajadores durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica."

Y ordena en su artículo 3:

"Artículo 3. Retiro de Cesantías. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el trabajador que haya presentado una disminución de su ingreso mensual, certificada por su empleador, podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante. Esta disposición aplica únicamente para retiros de los fondos administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de carácter ***privado****.*

La Superintendencia Financiera impartirá instrucciones inmediatas a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de carácter privado, para que la solicitud, aprobación y pago las cesantías los trabajadores se efectúe por medios virtuales, en razón a la emergencia declarada.

Parágrafo. Para retiro de las cesantías de que trata este artículo, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías de carácter privado, no podrán imponer requisitos adicionales que limiten la aplicación del presente artículo.

En desarrollo del anterior artículo, la Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa No. 013 de 2020 dirigida a los fondos de cesantías administrados por Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

El caso en concreto.

Procederá el despacho a establecer si la presente acción cumple los requisitos de procedibilidad que exige la ley para su estudio.

Frente al requisito de inmediatez.

Toda vez que el estado de emergencia fue decretado por el Gobierno Nacional en marzo de 2020, la accionante acudió a la Caja Honor el 3 de abril de 2020 y acudió a la jurisdicción el 22 de abril de 2020, considera el despacho que se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que el tiempo transcurrido entre el hecho presuntamente vulnerador de los derechos de la accionante y las actuaciones adelantadas por ella ante la entidad y ante la jurisdicción.

Frente al requisito de subsidiariedad.

En lo que respecta a este aspecto, debe mencionar el despacho que, toda vez que lo que pretende la accionante es la aplicación de una norma especial que fue concebida con ocasión al estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, lo que la convierte en una norma transitoria, y que por demás implica que no existe en la normatividad positiva o procesal un mecanismo establecido específicamente para salvaguardar el incumplimiento de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías a dicha norma, considera el despacho que la presente acción cumple igualmente el requisito de subsidiariedad exigido por la ley y la jurisprudencia, por cuanto como ya s mencionó, no existe otro mecanismo para que la accionante busque la salvaguarda de los derechos que considera conculcados, máxime cuando el estado de emergencia aún persiste.

Frente a la vulneración de los derechos al MÍNIMO VITAL y DIGNIDAD HUMANA.

Si bien, la Corte Constitucional ha esclarecido que el derecho al mínimo vital está directamente relacionado con el derecho a la dignidad humana, y que éstos comprenden:

(i) El acceso básico a condiciones dignas de existencia para el desarrollo del individuo, (la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación)

(ii) Que depende de su situación particular y

(iii) Es un concepto indeterminado cuya concreción depende de las circunstancias particulares de cada caso, por lo que requiere un análisis caso por caso y cualitativo.

Ahora bien, la accionante menciona en su escrito de tutela que convive con 10 miembros de su familia que se encuentran cesantes con ocasión de la medida de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional, toda vez que se desempeñaban

como independientes con anterioridad al 13 de marzo de 2020, e igualmente menciona que dentro de dicho núcleo familiar se encuentran dos menores de 2 y 3 años y una persona de la tercera edad (77 años).

No obstante, la accionante no allega prueba siquiera sumaria de lo que relata, de la existencia y edad de las personas que menciona ni del parentesco con las mismas.

De otro lado, observa el despacho de la documental allegada con el escrito de tutela, que la accionante se encuentra recibiendo su salario mensual, y pese a que se aprecian algunos descuentos, lo cierto es que éstos obedecen a obligaciones de tipo personal previamente adquiridas por la accionante y no a que la Policía Nacional haya adoptado alguna de las medidas que concedió el ejecutivo a los empresarios para contrarrestar los efectos económicos de la crisis actual, esto es, la reducción del salario, la suspensión temporal su contrato de trabajo o tomar una licencia no remunerada, máxime cuando su empleador no pertenece al sector privado.

Frente a este último aspecto debe mencionarse, además, que el Decreto 488 de 2020 contempla el retiro de cesantías, no solamente a trabajadores que hayan sido sometidos por parte de su empleador a una reducción de su salario, a la suspensión temporal de su contrato de trabajo o a tomar una licencia no remunerada, sino que, además, va dirigido a aquellos trabajadores que se encuentren afiliados a administradoras de fondos de pensiones y cesantía privados, esto es Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, pues como mencionó la accionada en su contestación, el artículo 2 de la Ley 973 de 2005 establece: *"ARTÍCULO 2o. NATURALEZA.* ***La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado*** *de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Bancaria."*

Así las cosas, considera el despacho que se encuentra plenamente demostrado que la accionante no ha sido sometida a una reducción de su salario, a la suspensión temporal su contrato de trabajo o a tomar una licencia no remunerada, que no se encuentra vinculada a una empresa del sector privado y que tampoco está afiliada a una administradora de fondos de pensiones y cesantías de carácter privado, por consiguiente, no cumple los requisitos exigidos por el Decreto 488 de 2020 y por tanto no le es aplicable.

En consecuencia, al no observarse vulneración a derecho fundamental alguno por parte de la accionada, se resolverá en tal sentido.

DECISIÓN

En razón y mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TREINTA Y TRES LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C**., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y mandato de la Constitución,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la presente acción en contra de la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA – CAJA HONOR, toda vez que no se vislumbra vulneración alguna de su parte a los derechos fundamentales de la accionante.

<u>SEGUNDO:</u> NOTIFICAR a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

<u>TERCERO:</u> REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento de no ser impugnado el fallo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



JULIO ALBERTO JARAMILLO ZABALA
JUEZ

Yg